

Quadernos del Sur

Año 18 - Nº 33

Mayo de 2002

NUEVAS DIRECCIONES

**www.cuadernosdelsur.org.ar
editores@cuadernosdelsur.org.ar**

Tierra
del  fuego

Estados Unidos - América Latina: la reorganización de un modo de dominación

Janette Habel

Nuestros enemigos reconocen que el poder de América emana de su seguridad económica y política. Es por esto que nuestra respuesta no puede ser unidimensional. Tenemos necesidad de una estrategia económica que complemente nuestra estrategia de seguridad" declaraba Robert Zoellick, secretario de Estado de Comercio norteamericano, después de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono. En consecuencia, el gobierno norteamericano ha decidido utilizar su potencia militar para ampliar sus alianzas comerciales y, en nombre de la lucha contra el terrorismo, amplificar y consolidar su hegemonía, en primer lugar sobre el hemisferio occidental, un mercado potencial de 800 millones de consumidores. Los intereses comerciales de Washington y sus ambiciones geopolíticas en su patio trasero han estado siempre fuertemente ligadas. La alternancia del garrote y la zanahoria forman parte del arsenal tradicional en el subcontinente: la política del dólar alternando con la diplomacia de la cañonera. Pero, a diferencia del pasado, ahora ya no apunta más a los estados en su singularidad sino al continente en su conjunto como mercado único.

El redespliegue económico y el reajuste estratégico mundial de la potencia norteamericana se hace en condiciones inéditas. Diez años después de la guerra fría se abre una nueva era. De Alaska a Tierra del Fuego, las Américas unidas en el seno de una zona de libre cambio podrían constituir el mayor mercado del mundo. Esta área de seguridad y esta base de respaldo sólidamente afirmadas servirían de trampolín para partir al asalto del resto del planeta, y para consagrarse la potenciación de la hegemonía norteamericana. Este objetivo se ha vuelto explícito después que tuvo lugar la primera cumbre de las Américas en Miami en 1994, la que reagrupó 34 estados, con la excepción de Cuba. Desde entonces ha habido otras dos cumbres: en Santiago de Chile en 1998, y más tarde en Quebec en 2001. El proce-

so de formación de un Área de Libre Comercio debería estar terminado en 2005, sancionando la realización de una integración regional subordinada y dependiente de los Estados Unidos, lo que sería un triunfo mayor en las negociaciones internacionales. Robert Zoellick no ha ocultado que ante un fracaso de la nueva ronda de liberalización comercial decidida en la reunión de la OMC en Qatar, los Estados Unidos continuarían solos sus esfuerzos, firmando acuerdos regionales o bilaterales, esquivando así los obstáculos del multilateralismo. El secretario de Estado de Comercio, por otra parte, ha precisado que “las conversaciones en curso para la realización del ALCA, como también las discusiones bilaterales con Chile y Singapur, se inscriben en este cuadro”.¹

Algunos obstáculos, que todavía no habían sido superados antes del 11 de setiembre, lo han sido más fácilmente ahora. En los Estados Unidos, a la administración Bush le ha costado vencer la resistencia de los sindicatos y de los grupos ecológicos y superar las resistencias de los republicanos en los sectores amenazados por la apertura de las fronteras (la siderurgia o la agricultura). Pero ha logrado obtener de la Cámara de Representantes –por un voto mayoritario– el “fast-track”, procedimiento rápido que permite la firma de tratados comerciales, que ha sido rebautizado como “Trade Promotion Authority” (TPA).

Las exigencias de los países latinoamericanos, divididos entre partidarios de una integración latinoamericana mediante una ampliación del MERCOSUR, o una integración interamericana (ALCA) bajo la tutela de Washington, hacen igualmente que las negociaciones sean más complejas.

Pero desde la caída de las Torres Gemelas la administración republicana se ha vuelto más perentoria. La Cámara de Representantes, ultimada –en nombre del “patriotismo económico”– a dar antes de fin del año 2001 (siendo el año 2002, año electoral, poco propicio a ciertas evoluciones) un cheque en blanco para negociar sin trabas, acaba de ceder. Es probable que el Senado ratificará la decisión.

En lo que respecta a los gobiernos latinoamericanos, se han apresurado a manifestar su apoyo a Washington después de los atentados. Pero según Andrés Oppenheimer, periodista del Miami Herald “George Bush espera de América latina algo más que condolencias. Si América latina se queda en eso, decepcionará a los Estados Unidos que, en los últimos años, han propuesto una integración comercial y diplomática más grande a sus vecinos del sur”. Los gobiernos del subcontinente, que intentaban negociar en bloque su entrada en el ALCA, deberán darse por enterados, comenzando por el gobierno brasileño.

A la conquista del mercado mundial

La idea del ALCA no es nueva. Hace más de un siglo, en 1889, los Estados Unidos convocaron a la primera conferencia panamericana. Todos los países del hemisferio se reunieron en Washington para crear una unión aduanera y para instalar un tribunal arbitral para resolver los conflictos regionales. Esta primera conferencia internacional de los Estados americanos fue un fracaso. La mundialización favorece su renacimiento. Este acuerdo comercial será el más importante que jamás se haya concluído en toda la historia. La realización de este pacto hemisférico, verdadero mercado cautivo, daría a los Estados Unidos una fuerza de choque sin precedentes en el escenario mundial. Con una población de 800 millones de habitantes, un PIB combinado de 11 billones de dólares, estaría en condiciones de imponer sus reglas al comercio mundial. El ALCA apunta en efecto a promover las normas más “avanzadas” en materia de comercio e inversiones, ya sean las del NAFTA del cual él es la proyección en el sur del continente, o las del Acuerdo General sobre los Servicios (AGCS) propuesto por la OMC, y hasta las del Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones (AMI) pese a que ha sido oficialmente enterrado. Las firmas multinacionales podrían ser beneficiarias, en este marco, de derechos exorbitantes que pondrían en conflicto a las legislaciones nacionales en materia de medio ambiente, salud o educación. Tendrían el poder de imponer a los Estados la tipificación de las normas y de las políticas macroeconómicas. Aprovechando la crisis de los servicios públicos, víctimas en América latina de los planes estructurales de ajuste impuestos por el FMI, estarían en condiciones de imponer la mercantilización de los servicios públicos y de los bienes comunitarios en todo el hemisferio, lo que llevaría en algún momento a su privatización.

Directamente inspirado en el capítulo 11 del NAFTA sobre las inversiones, el proyecto de acuerdo del ALCA da a las firmas la posibilidad de demandar ante la justicia a los gobiernos, si ellas consideran que sus bienes o sus ganancias son afectados por las leyes o las regulaciones nacionales, o si ellas se consideran víctimas de una competencia desleal. Una definición muy amplia de los derechos de propiedad prevalece sobre la regulación pública. El derecho de las multinacionales a demandar a los Estados por sus pérdidas de ganancias figuraba en el artículo 10, titulado “Expropiación y compensación” del borrador de acuerdo del ALCA, según reveló en abril de 2001 una ONG norteamericana antes de la cumbre de Quebec. Así, los derechos privados de las firmas multinacionales podrían suplantar lo establecido en las Constituciones nacionales, subordinando la soberanía de los Estados a los “derechos” de los inversores.

Ahora bien, es sobre la base del artículo 11 del NAFTA que, en el marco del tribunal de arbitraje, se han entablado demandas contra los gobiernos mexicano y canadiense. El capítulo 11 establece un nuevo sistema de arbitraje privado para los inversores extranjeros, que pueden plantear demandas contra los gobiernos. Las firmas multinacionales han resultado favorecidas en numerosos casos, ya sea porque han sido indemnizadas, ya sea porque los gobiernos han cedido a la presión por temor a represalias.² Las sentencias dictadas en estas jurisdicciones comerciales confirman la aparición de un nuevo marco normativo internacional que escapa a todo control público: las partes litigantes eligen los jueces del tribunal arbitral, deciden las reglas y principios susceptibles de ser aplicados y pueden imponer el secreto total sobre las actuaciones.³ Las firmas también pueden resolver sus litigios a su criterio, sin temer la ingerencia de los gobiernos en sus asuntos y menos aún la de organizaciones o asociaciones.

Los medios puestos a disposición de los negociadores del ALCA son considerables. Nueve grupos trabajan sin descanso sobre nueve temas: el acceso a los mercados, las inversiones, los servicios, el traspaso de los mercados públicos, la solución de los diferendos, la agricultura, los derechos de propiedad intelectual, las subvenciones antidumping y los derechos de compensación, las políticas de competencia. Un Comité Tripartito compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de Estados Americanos (OEA) da apoyo a los negociadores. Las empresas privadas están representadas por países y por sectores en el seno de un poderoso “lobby”, el *Americas Business Forum*, que ejerce una presión considerable para acelerar el proceso.

Ahora bien, después de los atentados se ha confirmado que la recesión norteamericana amenaza extenderse hasta aún internacionalmente. En este contexto la voluntad de acelerar las negociaciones se vuelve manifiesta. Las perspectivas económicas ya eran sombrías antes del 11 de setiembre. Pero el año 2001 podría ser el primero desde 1982 que registre una declinación tan fuerte en el comercio americano y mundial.⁴

Según el Banco Mundial “la desaceleración de la economía norteamericana ya ha provocado la caída de las importaciones, de las inversiones y del turismo, lo que paraliza las economías latinoamericanas y ciertos estados norteamericanos, como la Florida, que dependen del comercio con América latina y del turismo”. En esas condiciones el “comercio leal, libre y abierto” es el medio más eficaz para ganar la guerra contra la pobreza y

la miseria, proclaman los partidarios del ALCA. Es por eso, según Reginald Dale, periodista del *International Herald Tribune*, rápidamente hay que “construir una coalición política mundial contra el terrorismo y un frente unido contra la recesión mundial”, ambas cosas conjuntamente.

La adopción del *Trade Promotion Authority* da vía libre a George Bush para instaurar un nuevo panamericanismo y plantear “un hemisferio cerrado en un mundo abierto”, según la expresión del presidente Truman, lo que podría significar el fin de la identidad latinoamericana. Miami podría entonces ser la capital de las Américas: un objetivo que ya ha sido enunciado por los responsables de Florida.

Apertura económica, liberalización del desorden y de la violencia

La situación en el subcontinente se agrava. Se acumulan las catástrofes sociales desvastadoras producidas por la mano invisible del mercado. La exclusión social y la miseria producidas por la aplicación del Consenso de Washington y las recetas del FMI (privatizaciones, desregulación, liberalización del intercambio) afectan principalmente a las mujeres, los niños y las personas de edad. Nunca ha habido tantos pobres como hoy. Según la Comisión Económica para la América latina y el Caribe (CEPAL) en el año 2000 había 224 millones de latinoamericanos y caribeños pobres. Algunos países, como Brasil, México, Perú, Chile, Colombia, han batido el record mundial de desigualdades sociales. En Argentina, el economista Claudio Katz denuncia el estallido de la deuda pública, que ha pasado de 60 mil millones de dólares en 1991⁵ a más de 130 mil millones, después de 10 años de paridad peso-dólar.

La apertura de las fronteras ha significado la quiebra de la industria nacional, la ruina de los pequeños agricultores cuya producción ya no es competitiva frente a la de los grandes productores norteamericanos, (como es claramente el caso del maíz en México después de la firma del NAFTA), la destrucción del medio ambiente, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. En América Central, en las maquiladoras, el derecho de las trabajadoras (80 a 90% son mujeres) es violado sistemáticamente. En El Salvador menos del 2% de los obreros textiles están afiliados a un sindicato. No existen convenciones colectivas. Una lista negra de personas indeseables que hayan pedido la aplicación de la ley laboral permite rehusarles un empleo. La situación es la misma –y aún peor– en Honduras y el resto de la región.⁶ En 1990, Nicaragua figuraba en el puesto 60 en la escala de desarrollo humano de las Naciones Unidas, y hoy ocupa el puesto 116°. Sin embargo el desastroso balance del gobierno de Aleman no ha logrado bo-

rrar la amargura causada por la corrupción de la dirección sandinista, que perdió las elecciones de noviembre de 2001.⁷

En un estudio de conjunto reciente, Eric CALCAGNO, profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires, señala que sobre 100 empleos creados en América latina de 1990 a 1996, más de ochenta han sido empleos informales.⁸

En cuanto al poder de compra de los salarios de los trabajadores, ha disminuido un 27% en relación con el salario mínimo de 1980, como consecuencia de las privatizaciones, de los cierres de empresas y de las políticas destinadas a atraer las inversiones extranjeras. En general, el valor real promedio del trabajo ha descendido en estos últimos años. Agreguemos que con las privatizaciones de los servicios públicos decenas de miles de trabajadores han sido despedidos. Las nuevas formas de empleo que aparecen con la liberalización del mercado de trabajo y con el auge de la flexibilización conducen a un aumento de la pobreza. Desde ese punto de vista, el ejemplo de la Argentina es elocuente: 40% de la población trabaja en negro, y el desempleo afecta a un quinto de la población. “El aumento del sufrimiento social de los más desfavorecidos está en relación con la manera brutal con la que se efectúa la liberalización de los mercados” constata Pierre Salama.⁹

Más allá de las categorías más pobres, la crisis golpea con una amplitud inigualada a las clases medias, como lo evidencian las manifestaciones de docentes o de médicos argentinos. Según la Organización Panamericana de la Salud “267 millones de personas, o sea el 55% de la población de las Américas, sufren exclusión en razón de la falta de camas en los servicios de hospitalización, y 16 millones de personas tienen dificultades para tener acceso a un médico”.¹⁰

Los movimientos de protesta social se han multiplicado. En Bolivia, donde el 70% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, la privatización del agua ha dado lugar a manifestaciones de una amplitud tal que se declaró el estado de sitio durante 12 días. Desde hace dos años los campesinos sin tierra del Chaco boliviano ocupan propiedades abandonadas o inexploradas. El corte de rutas para protestar contra un proyecto de ley sobre la tierra y la erradicación forzada de las plantaciones de coca ha ocasionado decenas de heridos y seis muertos como consecuencia de los enfrentamientos con un nuevo cuerpo expedicionario, la *Fuerza de Tareas Expedicionaria* (FTE). Estos nuevos refuerzos son incorporados por el ejército para enfrentar los levantamientos indígenas cuyas organizaciones, como en el Ecuador, se fortalecen desde hace algunos años. En Argentina, los pi-

queteros también han adoptado el corte de rutas como forma de lucha en países donde las luchas de los trabajadores ocupados se desenvuelven en condiciones muy difíciles.

Pero estas protestas son consideradas cada vez más como delitos, y la represión crece. En el campo, las milicias privadas de los grandes terratenientes brasileños o de los grandes ganaderos bolivianos actúan con total impunidad. En las grandes ciudades la policía reprime a los chicos de la calle.

El aumento de la delincuencia, del narcotráfico y de la inseguridad son noticia de todos los días. América latina es considerada como una de las regiones más violentas del mundo. Las cárceles están llenas, allí las condiciones de vida son infrahumanas y los motines se repiten.

La magnitud tomada por el tráfico de droga y sus redes financieras, la corrupción generalizada, el hundimiento de las barreras jurídicas y de la soberanía de los Estados explican la desintegración social y el caos que reinan en zonas sin ley, en particular cerca de la frontera norteamericano-mexicana. Allí millones de latinoamericanos intentan llegar a El Dorado norteamericano, con peligro de sus vidas: cada año cientos de muertos son hallados a lo largo de la frontera o en el desierto de Arizona. Estos flujos migratorios crecientes son considerados un peligro por la Seguridad Nacional de Estados Unidos, tanto que se sugiere la creación de un perímetro de seguridad, una zona geográfica con normas de seguridad comunes a los tres países miembros del NAFTA. Hasta se plantea instalar guardias fronterizas norteamericanas en la frontera sur de México para controlar la entrada de emigrantes centroamericanos; esta proposición habría sido rechazada por México que en lugar de eso habría aceptado una asistencia técnica para la formación de sus agentes y la presencia de guardias armadas en los vuelos de las empresas aéreas norteamericanas. La contradicción entre la libre circulación de bienes y servicios y los límites impuestos a la libre circulación de personas nunca ha sido tan flagrante.

Reajustar el sistema de defensa hemisférico

En Washington no se ignora la degradación de la situación social en el continente. La administración y los diferentes *think tanks* saben que los potenciales beneficios de la zona libre comercio presuponen el controlar la inestabilidad y el desorden regional.

El muy influyente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, consagra a esto muchos estudios que ponen en evidencia la relación entre la construcción de una zona de libre comercio continental, y la “nueva arquitectura de seguridad en las Américas”.

La integración regional implica redefinir y reforzar el sistema de defensa hemisférico con el fin de asegurar la estabilidad y el orden continental debilitado por las amenazas transnacionales (tráfico de droga, inmigración clandestina, terrorismo). En efecto, para preservar su hegemonía los Estados Unidos no dudan en presentar todo tema relativo al comercio y a la inversión como un tema de seguridad nacional. Ahora bien, los débiles países del sur no pueden enfrentar solos a estos nuevos peligros, constata Patrice Franko,¹¹ quien omite señalar que esta conmoción social es resultado de la brutalidad de las políticas de ajuste estructural. Para enfrentar esos peligros (principalmente en Colombia) ha sido planteada la creación de una Fuerza Multilateral de Paz bajo la égida de un “país amigo” –La Argentina, por ejemplo, país “privilegiado” por Washington–.

En Colombia es donde está más amenazado el orden regional. Drogas y terrorismo –cuyas causas económicas y sociales nunca han sido analizadas– justifican una guerra de baja intensidad no declarada. El Plan Colombia fue dado a conocer en 1998. Inicialmente debía permitir a la guerrilla participar en la negociación y en la ejecución de proyectos sectoriales de rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia y los cultivos ilegales, apoyándose sobre las comunidades locales. Presentado por el presidente Pastrana ante el Parlamento Europeo como un plan para la paz y el desarrollo, “la protección de los derechos humanos, el afianzamiento de la justicia y el aumento de la participación social” el Plan Colombia ha sido revisado y corregido por la administración norteamericana en nombre de la lucha anti-droga y de la amenaza que representa la guerrilla para la seguridad del hemisferio. El Plan Colombia es hoy un plan de intervención militar en el que estrategia anti-droga y estrategia anti-insurreccional van juntas con una ingerencia norteamericana creciente en un país víctima de una guerra civil,¹² país ubicado por la UNESCO en la categoría de país sin Estado...

La ayuda masiva de los Estados Unidos a las fuerzas armadas colombianas, y la presencia de asesores militares, ha sido denunciada por *Human Rights Watch* y el Alto Comisariado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que califica la situación como de “degradación humanitaria desenfrenada”. Las fumigaciones utilizadas para destruir las plantaciones de coca amenazan a la población y a la biodiversidad. El glifosato es un herbicida químico de la multinacional Monsanto, que puede provocar problemas intestinales y respiratorios. Utilizado para destruir los arbustos de coca, provoca intoxicaciones y dolores craneanos, y destruye los cultivos de mandioca.

La importancia del Plan Colombia –1300 millones de dólares– y la ayuda estadounidense a las fuerzas armadas colombianas también se explica por el

petróleo. Los Estados Unidos tienen importantes intereses en esta región petrolera vecina a Panamá. Michael Klare constata que desde 1993 “la administración Clinton ha hecho de la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento petrolero un objetivo estratégico principal... La mayor amenaza que la guerrilla hace pesar sobre Colombia no es su vinculación con el tráfico de droga sino sus ataques a blancos económicos, particularmente de la industria petrolera... los ataques de la guerrilla no sólo tienen consecuencias sobre la producción petrolera, sino que también aterran a los inversores. No es para asombrarse que la firma *Occidental Petroleum*, que opera en el noreste, lejos de los campos de coca, sea uno de los principales apoyos del Plan Colombia”.¹³

Estas preocupaciones conciernen también a Venezuela, uno de los principales proveedores de los Estados Unidos, cuyos petroleros llegan a los puertos norteamericanos diez veces más rápido que los del Golfo Pérsico. Las relaciones con el presidente Chávez –el único jefe de Estado (sobre 34) que ha votado contra el ALCA en la Cumbre de las Américas en Quebec en abril de 2001– se han deteriorado después que él prohibió el sobrevuelo del territorio a los aviones norteamericanos, y ha criticado los bombardeos a Afganistán (sin que por ello haya olvidado el condenar los atentados del 11 de setiembre).

Colombia se beneficia de una situación geopolítica privilegiada: una doble salida marítima sobre el océano Atlántico y sobre el Pacífico, una frontera común con cinco países: Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. Esos países limítrofes ya han sido desestabilizados por la llegada de refugiados. Se evalúa en un millón la cantidad de colombianos desplazados en el interior de su país. En el exterior, Venezuela acoge aproximadamente 1.500.000 refugiados. En Ecuador, miles de campesinos han llegado provenientes del departamento vecino de Putumayo (Colombia), huyendo de las fumigaciones y de los enfrentamientos. Brasil ha concentrado muchos miles de hombres en su frontera al norte de la Amazonía.

En Ecuador, la base militar de Manta, construida a partir de los acuerdos firmados con Estados Unidos, ocupa una posición estratégica. Cerca al mar, dotada de equipos y de instalaciones militares sofisticadas, está destinada oficialmente a la vigilancia electrónica del tráfico de droga. Las inversiones norteamericanas en curso son considerables: la construcción de la pista de aterrizaje permitirá recibir aviones Galaxy que posibilitan el desplazamiento rápido de 15 a 20.000 hombres, un contingente sin relación alguna con las necesidades de la lucha contra la droga y que no tiene sentido salvo en la perspectiva de una intervención. El gobierno ecuatoriano ha justificado su decisión argumentando la amenaza que el conflicto

colombiano hace pesar sobre la seguridad de un país en el que tuvo lugar, en enero de 2000, la primera rebelión indígena del tercer milenio.

La multiplicación de los enfrentamientos entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares hacen temer una extensión regional. La ola de artículos sobre la guerrilla colombiana en los periódicos de Florida después del 11 de setiembre y la calificación de "terrorista" atribuida tanto a las FARC, al ELN¹⁴ como al AUC dejan entrever la agravación del conflicto, una vez que esté lista la infraestructura y esté "arreglado" el conflicto afgano.

El Área de Libre Comercio de las Américas debería nacer en 2005. La nueva ronda de negociaciones decidida en la cumbre de la OMC también debería culminar en esa fecha. Finalmente la Unión Europea aspira también a firmar con el MERCOSUR un acuerdo de asociación bi-regional de aquí al 2005 para evitar "las distorsiones de la competencia". Según van las cosas, el estallido del libre comercio en América latina arriesga desencadenar un caos social difícil de controlar. Es por esto que para los amos del mundo, la globalización económica y la globalización político-militar van juntas. Dicho de otra manera, la mundialización del capital debe ser acompañada por una militarización acrecentada. Estamos lejos del discurso beatífico escuchado después de la caída del muro de Berlín, sobre el fin de las ideologías en un mundo pacificado y liberado por el mercado.

París, noviembre de 2001

Notas

1 International Herald Tribune 3/4 noviembre 2001

2 Maude Barlow *The free trade area of the Americas and the threat to social programs, environmental sustainability and social justice in Canada and the Americas* www.canadians.org The Council of Canadians

3 William Greider *Sovereign Corporations* The Nation 30 abril 2001 y *The right and US trade law : invalidating the 20th century* The Nation 15 octubre 2001

4 R.Zoellick IHT 28/9/01.

5 En esa época la inflación superaba el 2000%

6 Diffusion de l'information sur l'Amérique latine (D.I.A.L.) 16/30 junio 2000

7 Bernard Duterme Espacios latinos N° 188 noviembre 2001

8 Citado por Pierre Salama

9 Ibid.

10 América latina en movimiento / ALAI 4/7/2000

11 Patrice Franko « Toward a New Security Architecture in the Americas » CSIS Washington 2000

12 Ver a este respecto el análisis de D.I.A.L. 1-15 mayo 2000

13 Michael Klare U.S. aid to Colombia's military : the oil connection NACLA N° 4 enero/febrero 2001

14 Es la falta de una reforma agraria la que originó las FARC. Los AUC son grupos paramilitares ligados a sectores del ejército colombiano.

Argentina: una crisis de nuevo tipo

Emir Sader

No puede compararse ni con la crisis mexicana de 1994 ni con la asiática de 1997 ni con la rusa de 1998 o la brasileña de 1999 y, sin embargo, la crisis argentina tiene el mismo origen –una crisis producida por las políticas neoliberales. Aunque ella se detonó por mecanismos similares a los de las otras –tipo de cambio sobrevaluado, endeudamiento, incapacidad de manter los niveles de deuda, en suma, financiarización que vuelve al país rehén de la especulación–, el período es diferente. En 1994, por ejemplo, cuando la euforia de la expansión norteamericana recién comenzaba, los EE.UU. enfrentaron inmediatamente la crisis mexicana con un préstamo gigante. El FMI atendió sucesivamente a Corea del Sur, a Rusia, a Brasil, a Turquía, entre otros países en crisis.

Los efectos de las crisis fueron relativamente circunscriptos al ámbito financiero y los países, si no se recuperaron, por lo menos recompusieron el aliento para seguir la batalla de Sísifo de la renegociación constante de sus deudas. Incluso hasta Rusia, que llegó a decretar la moratoria, gracias al aumento de los precios y de la demanda externa de petróleo y de gas, consiguió recuperarse relativamente.

Desde el año pasado, sin embargo, el escenario general cambió, y este es el primero de los aspectos que hace de la crisis argentina una crisis de nuevo tipo. En primer lugar, porque la economía norteamericana ingresó en un nuevo ciclo recesivo, cerrando los años de expansión que la marcaran –así como, económicamente, a la economía mundial– en la década de los noventa. El clima general es recesivo, y ninguna otra de las grandes economías escapa al mismo, generalizándose a la tríada de la economía capitalista avanzada –EE.UU., Europa occidental y Japón– el mismo escenario.

En ese marco, el gobierno de Bush encontró mayores facilidades para imponer una nueva política al FMI –la de desresponsabilizarse de las falencias de las economías periféricas endeudadas, dejando que quiebren y

acuerden directamente con sus acreedores. Hay una diferencia notoria entre la asistencia inmediata a México o a Brasil y la actitud en relación con Argentina, por ejemplo. (Un caso diferente es el perdón del 30% de las deudas de Paquistán y la renegociación del resto, resultado de la política de “nueva guerra fría” impuesta por los EE.UU. a partir del 11 de septiembre pasado.)

Por otro lado, años de descomposición de las relaciones sociales como resultado de las políticas neoliberales –de las que la financiarización por arriba y la precarización de las relaciones de trabajo por abajo son algunos de los resultados mas graves– corroyeron la cohesión social de las sociedades latinoamericanas.

Así, la crisis argentina, iniciada como una crisis financiera, devino rápidamente una crisis social, política e ideológica –en otras palabras, en una crisis hegemónica, en la que los antiguos consensos ya no tienen capacidad de cohesionar mínimamente a la sociedad y los nuevos todavía no nacieron.

Por mas que los defensores de las políticas neoliberales se dediquen cotidianamente a intentar atribuir la crisis argentina a factores contingentes –los gastos excesivos de Menem, por ejemplo–, fue la forma mas extrema de las políticas cambiarias neoliberales –la convertibilidad peso/dólar– lo que terminó haciendo explotar en la superficie la crisis que venía gestándose hace tiempo. En palabras de Bertold Brech, los excesos revelan la esencia de un fenómeno.

Así, el remedio extremo de la convertibilidad apenas exacerbó la naturaleza insustentable y socialmente cruel de las políticas de ajuste fiscal, cuya crisis amenaza extenderse a países como México y Brasil, no por su poder de contagio desde afuera –lo que apenas multiplicaría sus efectos–, sino por la presencia de los mismos elementos de financiarización y de desagregación del Estado, de la vida política, de las instituciones sociales, de las relaciones de trabajo –en suma, del conjunto de las relaciones sociales en nuestras sociedades. Lo que cambió no es solamente la Argentina, es el escenario general, con el agotamiento de las políticas neoliberales, con nuestras sociedades pidiendo angustiadamente proyectos que las superen, para que lleguemos finalmente al tan ansiado pós-neoliberalismo. La crisis argentina revela los límites de un modelo de mercantilización extrema de la sociedad, en el que todo se vende, todo se compra, todo tiene precio, y lo que no logra cotizarse en el mercado se puder marginalizado por el poder del dinero.

En el límite, nuestras sociedades tienen delante de si la alternativa de

tornarse definitivamente *shopping centers* –en los que sólo hay lugar para algunos, los de alto poder adquisitivo, teniendo los otros que ser mantenidos afuera por cordones de seguridad, para viabilizar sociedades de apartheid social– o reconstruirse como plazas públicas con lugar para todos, fundadas en los derechos universales y no en las leyes del mercado, que seleccionan y excluyen por el dinero.

¿Y qué haría usted con una empresa de asesoría que hubiese pronosticado para el año pasado un crecimiento notable de la economía de los EE.UU. del 4,2%, que hubiese advertido que los problemas eventuales vendrían de las presiones inflacionarias –un producto de la fuerte expansión– y que no habría ningún riesgo de explosión de la burbuja especulativa, ya sea en las empresas de alta tecnología o en el conjunto de la economía? Cerraría, ¿no? Es el caso del FMI, responsable de esas previsiones.

Orealidad Económica



Hipólito Yrigoyen 1116 (1088) Buenos Aires